

# GOBIERNO DE PUERTO RICO

20<sup>ma</sup>. Asamblea  
Legislativa

3<sup>ra</sup>. Sesión  
Ordinaria

## SENADO DE PUERTO RICO

### P. del S. 1254

11 de mayo de 2026

Presentado por la señora *Barlucea Rodríguez*

*Referido a la Comisión de*

#### LEY

Para enmendar la Regla 510 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, a los fines de actualizar la referencia interna sobre renuncia a privilegios; añadir una nueva Regla 517, para reconocer estatutariamente el privilegio cualificado de la persona que ejerce la libertad de prensa respecto a sus fuentes e información confidencial, conforme a la protección constitucional de la libertad de expresión y de prensa; reenumerar las actuales Reglas 517 y 518 como Reglas 518 y 519, respectivamente; disponer normas sobre el alcance, aplicación, renuncia e interpretación de dicho privilegio; y para otros fines relacionados.

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La libertad de expresión y de prensa constituye uno de los pilares esenciales del orden constitucional americano. Su función no se agota en proteger la palabra individual, sino que resguarda el libre flujo de información, opiniones e ideas que permite a la ciudadanía fiscalizar al gobierno, examinar a las figuras públicas, denunciar irregularidades y participar de manera informada en una sociedad democrática.

La Sección 4 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico dispone que “[n]o se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa”. Dicha protección corresponde a los postulados de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y debe interpretarse de manera compatible con el reconocimiento ofrecido por el Tribunal Supremo federal, y no en menor grado de protección. Así lo ha reconocido

reiteradamente nuestro Tribunal Supremo al destacar que la libertad de expresión es una raíz indiscutible del sistema democrático de gobierno y que, en la constelación de valores democráticos, goza de una primacía peculiar.

En *Izquierdo II v. Cruz y otros*, 213 DPR 607 (2024), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció por primera vez la existencia del privilegio cualificado del periodista en protección de sus fuentes e informaciones confidenciales. El Alto Foro resolvió que dicho privilegio surge como corolario del derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa. De ese modo, Puerto Rico se alineó con la tendencia predominante en las jurisdicciones estatales de Estados Unidos y en los circuitos apelativos federales, los cuales han reconocido, por vía legislativa, constitucional, jurisprudencial o de derecho común, alguna forma de protección para evitar la divulgación injustificada de fuentes confidenciales.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en *Branzburg v. Hayes*, 408 U.S. 665 (1972), resolvió que la Primera Enmienda no exime generalmente a los periodistas de comparecer y testificar ante un Gran Jurado en el contexto de investigaciones criminales. Sin embargo, esa decisión no cerró la puerta al reconocimiento de protecciones estatutarias o constitucionales en otros contextos. Al contrario, el propio Tribunal Supremo federal reconoció expresamente que el Congreso, las legislaturas y los tribunales estatales podían reconocer un privilegio periodístico, cualificado o absoluto, dentro de los parámetros de la Primera Enmienda.

Luego de *Branzburg*, cuarenta y nueve estados, así como el Distrito de Columbia, han reconocido algún tipo de privilegio en protección de las fuentes confidenciales, ya sea mediante las llamadas *shield laws* o por vía judicial a través de la interpretación de sus constituciones estatales o del derecho común. Aunque no existe una protección estatutaria federal uniforme, casi todos los tribunales apelativos federales han reconocido, en distintos contextos, el privilegio cualificado del periodista, sujeto a un análisis caso a caso, a un balance de intereses y a variaciones de un test de tres factores.

Ese consenso de las jurisdicciones hermanas responde a una política pública fundamental de que la prensa libre no puede cumplir su función constitucional si las fuentes confidenciales quedan expuestas automáticamente cada vez que una persona afectada por una publicación presenta una reclamación civil. Sin fuentes protegidas, disminuye la información disponible; sin información, se debilita la fiscalización pública; y sin fiscalización pública, se erosiona la democracia representativa. Puerto Rico, como jurisdicción americana, no debe quedar rezagado frente a esa tradición constitucional ni reconocer a sus ciudadanos una libertad de prensa inferior a la que disfrutaban los ciudadanos de los estados.

Como se ha señalado desde la academia, el reconocimiento de este privilegio es una afirmación trascendental de los valores que sostienen una sociedad democrática, pues permite que las personas con información relevante puedan compartirla sin temor a represalias y asegura que quienes ejercen la libertad de prensa puedan cumplir su función fiscalizadora.<sup>1</sup> También se destaca, además, que Puerto Rico no debe alejarse de la gran nación ni resolver de manera distinta a como lo han hecho los estados y circuitos federales, pues negar este privilegio equivaldría a tratar la libertad de prensa de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico como una libertad de segunda clase.<sup>2</sup>

El reconocimiento jurisprudencial de *Izquierdo II* fue un avance necesario, pero no agota la responsabilidad legislativa. El propio Tribunal Supremo expresó que el Poder Legislativo tiene la facultad de aprobar legislación para complementar el privilegio y atender de manera específica los asuntos que afecten el interés público, siempre dentro de los parámetros constitucionales que aseguran el derecho a la libertad de expresión y de prensa.

Esta Asamblea Legislativa ejerce esa facultad. La presente medida no crea el privilegio desde cero, sino que lo incorpora expresamente a las Reglas de Evidencia de Puerto Rico

---

<sup>1</sup> J. A. Cosme Morales, *Izquierdo II v. Cruz y otros: el privilegio cualificado del periodista en Puerto Rico*, 64 Rev. Der. P.R. 277 (2025).

<sup>2</sup> *Id.* (“No reconocer este privilegio cualificado significaría colegir que los ciudadanos americanos del territorio tienen una libertad de prensa de segunda clase”).

para proveer certeza, uniformidad y guía a los tribunales, litigantes, medios de comunicación y ciudadanos que ejercen actos de prensa. La codificación propuesta no reduce la protección constitucional reconocida por el Tribunal Supremo. Por el contrario, la traduce a una regla probatoria clara y compatible con la tradición constitucional americana. La medida adopta un enfoque funcional. La protección no se limita a periodistas profesionales, empleados de medios tradicionales o personas con credenciales ocupacionales específicas. La libertad de prensa protege una función constitucional de recopilar, investigar, recibir, redactar, editar, publicar, grabar, producir, transmitir o difundir información, análisis, comentarios u opiniones sobre asuntos de interés público. En la realidad contemporánea, esa función puede ser ejercida por periodistas profesionales, comunicadores digitales, investigadores independientes, columnistas, académicos, ciudadanos periodistas y otras personas que realizan actos de prensa. Limitar el privilegio únicamente a una profesión formal sería incompatible con la amplitud de la garantía constitucional.

A la vez, el privilegio que se reconoce es cualificado, no absoluto. En casos civiles de difamación, libelo, calumnia o reclamaciones análogas, la parte que solicita la divulgación de una fuente confidencial o de información confidencial deberá superar una carga específica. Primero, el tribunal deberá determinar si la información solicitada es pertinente. Luego, la parte promovente deberá demostrar: (1) que lo publicado es falso y difamatorio; (2) que realizó esfuerzos razonables para descubrir la fuente o información por otros medios; y (3) que conocer la identidad de la fuente o la información confidencial es necesario para establecer su causa de acción. Ese es el balance adoptado por el Tribunal Supremo en *Izquierdo II*.

La regla propuesta también reconoce el límite establecido por *Branzburg*. Por ello, el privilegio no se extiende a procedimientos criminales ni a investigaciones criminales en las que esté presente el interés público superior en la investigación, procesamiento y adjudicación de conducta delictiva. La medida se dirige principalmente a los procedimientos civiles o administrativos de naturaleza adjudicativa donde el

descubrimiento de prueba pueda utilizarse para obligar la divulgación de fuentes confidenciales sin una demostración suficiente de necesidad.

Esta legislación tampoco impide reclamaciones legítimas por daño a la reputación. Lo que impide es que el descubrimiento de prueba se convierta en un mecanismo automático de intimidación, represalia o silenciamiento. Como reconoció el Tribunal Supremo, el privilegio cualificado es el mecanismo adecuado para vedar solicitudes caprichosas y arbitrarias que busquen descubrir injustificadamente fuentes e informaciones confidenciales en casos civiles de libelo. De esa manera se protege el libre intercambio de ideas y se promueve mayor acceso a la información en beneficio de la ciudadanía.

En suma, esta Ley coloca a Puerto Rico donde debe estar: dentro de la corriente principal del constitucionalismo americano. Reconoce que la libertad de prensa no es un privilegio de clase, sino una garantía de todos los ciudadanos que ejercen actos de prensa sobre asuntos de interés público. Codifica el balance establecido por nuestro Tribunal Supremo, atiende el vacío estatutario existente, armoniza nuestro derecho probatorio con la experiencia de los estados y reafirma que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tienen derecho a una prensa libre, vigorosa y protegida en igual dignidad constitucional.

#### **DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

1        Artículo 1.- Se añade una nueva Regla 517 a las Reglas de Evidencia de Puerto Rico,  
2        para que lea como sigue:

3                *“Regla 517. Privilegio cualificado de la persona que ejerce la libertad de prensa*

4                *(A) Según usadas en esta Regla, las siguientes expresiones tendrán el significado que a*  
5        *continuación se indica:*

6                *(1) Persona que ejerce la libertad de prensa: Persona natural que, sea o no periodista de*  
7        *profesión, y con independencia de su título ocupacional, relación de empleo, remuneración,*

1 *afiliación a un medio de comunicación o plataforma utilizada, recopila, investiga, recibe,*  
2 *redacta, edita, publica, graba, produce, transmite o difunde información, noticias, análisis,*  
3 *comentarios u opiniones sobre asuntos de interés público, en el ejercicio de la libertad de prensa*  
4 *reconocida por la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos. Incluye,*  
5 *sin que se entienda como una limitación, a periodistas, reporteras, reporteros, editoras, editores,*  
6 *columnistas, productoras, productores, fotoperiodistas, corresponsales, investigadoras,*  
7 *investigadores, comunicadoras, comunicadores y cualquier otra persona que realice*  
8 *sustancialmente un acto de recopilación o divulgación de información al público.*

9       (2) *Fuente confidencial: Persona natural o jurídica que suministra información a una*  
10 *persona que ejerce la libertad de prensa, bajo una expectativa expresa o razonable de*  
11 *confidencialidad, en el curso de una investigación, publicación, comunicación o gestión*  
12 *informativa sobre un asunto de interés público.*

13       (3) *Información confidencial: Información, comunicación, documento, nota, grabación,*  
14 *imagen, archivo, dato, material de trabajo, contenido no publicado o cualquier otro material*  
15 *obtenido, recibido, preparado o conservado por una persona que ejerce la libertad de prensa,*  
16 *cuya divulgación pueda revelar, directa o indirectamente, la identidad de una fuente*  
17 *confidencial o el contenido de la información suministrada por ésta.*

18       (B) *Sujeto a lo dispuesto en la Regla 518, sobre renuncia a privilegios, una persona que*  
19 *ejerce la libertad de prensa tiene el privilegio cualificado de negarse a divulgar o impedir que*  
20 *otra persona divulgue la identidad de una fuente o información confidenciales obtenida,*  
21 *recibida, preparada o conservada en el curso del ejercicio de la libertad de prensa.*

1       (C) El privilegio establecido en esta Regla podrá ser invocado por la persona que ejerce la  
2 libertad de prensa, por el medio, entidad, plataforma u organización para la cual trabaja,  
3 colaboró o publicó, o por cualquier persona natural o jurídica con legitimación para proteger la  
4 confidencialidad de la fuente o de la información solicitada.

5       (D) Esta Regla no aplicará en procedimientos criminales. Tampoco podrá invocarse para  
6 negarse a comparecer, testificar o producir información en una investigación criminal,  
7 procedimiento penal o proceso relacionado con la investigación, procesamiento o adjudicación  
8 de conducta delictiva.

9       (E) En procedimientos civiles o administrativos, no se ordenará la divulgación de una  
10 fuente confidencial o de información confidencial protegida por esta Regla, salvo que el Tribunal  
11 determine, como cuestión de umbral, que la información solicitada es pertinente a la  
12 reclamación o defensa planteada y que la parte que solicita la divulgación ha demostrado,  
13 mediante prueba específica:

14       (1) Que lo publicado es falso y difamatorio, cuando se trate de una acción por difamación,  
15 libelo, calumnia o reclamación análoga.

16       (2) Que realizó esfuerzos razonables para obtener la fuente, la identidad, la información o  
17 su equivalente sustancial por otros medios menos lesivos al ejercicio de la libertad de prensa.

18       (3) Que conocer la identidad de la fuente o la información confidencial es necesario para  
19 establecer un elemento esencial de su reclamación o defensa.

20       (F) Al hacer la determinación requerida por el inciso (E), el Tribunal deberá balancear la  
21 necesidad demostrada por la parte que solicita la divulgación frente al efecto que tal divulgación

1 *tendría sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, la recopilación de información, la*  
2 *confidencialidad de las fuentes y el libre flujo de información al público.*

3 *(G) Si el Tribunal ordena la divulgación de una fuente confidencial o de información*  
4 *confidencial, limitará la orden al alcance estrictamente necesario para satisfacer la necesidad*  
5 *demostrada. El Tribunal podrá adoptar medidas protectoras, incluyendo revisión en cámara,*  
6 *sellado del expediente judicial, limitación de uso, divulgación parcial, redacciones, órdenes de*  
7 *confidencialidad o cualquier otra medida adecuada.*

8 *(H) Evidencia que sea de otra manera admisible o que esté sujeta a descubrimiento fuera de*  
9 *la relación confidencial protegida por esta Regla no será inadmisible ni quedará protegida del*  
10 *descubrimiento únicamente porque haya sido comunicada, suministrada o conocida por una*  
11 *persona que ejerce la libertad de prensa.*

12 *(I) Nada de lo dispuesto en esta Regla se interpretará como una limitación a la libertad de*  
13 *expresión o de prensa reconocida por la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de*  
14 *Estados Unidos, ni como una reducción de cualquier otra protección constitucional,*  
15 *estatutaria, jurisprudencial o reglamentaria aplicable al ejercicio de la libertad de prensa."*

16 **Artículo 2.-** Se enmienda la Regla 510 a las Reglas de Evidencia de Puerto Rico,  
17 para que lea como sigue:

18 " ...

19 **(B)** Sujeto a lo dispuesto en la Regla **[517]** 518, sobre renuncia a privilegios de  
20 comunicaciones confidenciales, un cónyuge, o su tutora o tutor -si lo tuviera- sea o no  
21 parte en el procedimiento, tiene el privilegio de negarse a divulgar o impedir que otra

1 persona divulgue, durante la vigencia y luego del matrimonio, una comunicación  
2 confidencial habida entre los cónyuges, hecha mientras estaban casados.

3 ...”

4 Artículo 3.- Se reenumeran la actual Regla 517 y 518 de las Reglas de Evidencia de  
5 Puerto Rico como Regla 518 y 519 respectivamente.

6 Artículo 4.- Vigencia

7 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.